LUCÍA VERÓNICA POSE
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
lvposep@gmail.com

LA DESPROTECCIÓN JURÍDICA PROVOCADA POR LA AUSENCIA DE NORMATIVA ACTUALIZADA Y ACORDE A LA REALIDAD SOCIO-DEMOCRÁTICA IMPERANTE (ARGENTINA)

THE LACK OF LEGAL PROTECTION CAUSED BY THE ABSENCE OF UPDATED REGULATIONS IN ACCORDANCE WITH THE PREVAILING SOCIO- DEMOCRATIC REALITY (ARGENTINA)

Cómo citar el artículo:

Pose, L (2025). La desprotección jurídica provocada por la ausencia de normativa actualizada y acorde a la realidad socio-democrática imperante (Argentina). *Derecho Global. Estudios sobre Derecho y Justicia*, X (30) <https://DOI.org/10.32870/dgedj.v10i30.843> pp. 415-440

Recibido: 20/01/2025 Aceptado: 20/07/2025

RESUMEN

El objetivo del presente artículo es indagar sobre la importancia que los sistemas jurídicos no sólo reconozcan formalmente los derechos, sino que garanticen su efectivización en una sociedad que muta constantemente. A tal fin, se ha recurrido a un nuevo concepto para denominar esta situación, se ha analizado el rol esencial del Poder Legislativo en esta misión y su responsabilidad ante el incumplimiento de dicho objetivo. La metodología utilizada es de tipo descriptivo analítico. El resultado de la investigación es que la inadecuación normativa es sinónimo de ausencia de tutela. Finalmente, se concluyó que los ciudadanos ya no sólo exigen un Estado que reconozca sus derechos, sino que requieren de un Estado dinámico que asegure un marco jurídico eficiente que fortalezca la convivencia democrática y garantice el bienestar de los integrantes de la comunidad.

PALABRAS CLAVE

Poder Legislativo, activismo judicial, “resguardo jurídico efectivo”, derechos, ley.

ABSTRACT

The objective of this article is to investigate the importance of legal systems not only formally recognizing rights, but also guaranteeing their realization in a society that constantly mutates. To this end, a new concept has been used to name this situation, the essential role of the Legislative Branch in this mission and its responsibility in the event of failure to achieve said objective has been analyzed. The methodology used is descriptive-analytical. The result of the investigation is that regulatory inadequacy is synonymous with the absence of protection. Finally, it was concluded that citizens no longer only demand a State that recognizes their rights, but they require a dynamic State that ensures an efficient legal framework that strengthens democratic coexistence and guarantees the well-being of the members of the community.

KEYWORDS

Legislative Branch; judicial activism, “effective legal protection”, rights, law.

Sumario: I. La necesidad e importancia de las leyes en el ordenamiento jurídico. II. Las causales de la desprotección jurídica ocasionadas en el ordenamiento jurídico. III. El

impacto negativo de un ordenamiento jurídico inadecuado para la protección del derecho a tutelar. IV. Un nuevo concepto: el resguardo jurídico efectivo. V. La viabilidad de la responsabilidad estatal por la omisión del Poder Legislativo de sancionar normas eficaces. VI. La responsabilidad política del Poder Legislativo por vulneración de la garantía de resguardo jurídico efectivo. VII. Conclusión. Bibliografía.

I. LA NECESIDAD E IMPORTANCIA DE LAS LEYES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

Si bien las fuentes del derecho son múltiples, a partir de la Revolución Francesa, las leyes se transformaron en la fuente más importante del ordenamiento jurídico adquiriendo un carácter que, en un primer momento, fue considerado casi sagrado, lo que explica que se prohibiera a los jueces interpretarlas.

Se consideraba en tal sentido que las leyes sancionadas a través de un proceso de rango constitucional por un órgano integrado por personas que eran elegidas por el pueblo, tendían a crear un orden nuevo de carácter lógico que tenía por objetivo elevar el bienestar de todos los individuos bajo las premisas de libertad, igualdad y fraternidad, encontrándose en cabeza del cuerpo legislativo la misión de instrumentarlo sin que fuese dable a los jueces vulnerarlo a través de interpretaciones aviesas o incorrectas emanadas de su ideología personal.

Borda (2008) nos recuerda que la desconfianza hacia los jueces era tan profunda que, un tribunal inglés, absolvió a un acusado de bigamia porque tenía tres mujeres en lugar de las dos que la ley imponía para penalizarlo y que, tras la Revolución Francesa, se acuñó la frase de que los ciudadanos para ser libres debían ser necesarios esclavos de la ley, permitiéndose sólo una interpretación estrictamente gramatical del texto legal: los magistrados debían ser las voces de la ley sin poder recurrir a argumentos ajenos al texto de la directiva.

No obstante, dicho período fue breve pues, paulatinamente, se fue advirtiendo que las leyes son imperfectas en virtud de su generalidad, de su complejidad y la diversidad de los actos humanos a regular, aceptándose, finalmente, que un poder independiente -esto es el Poder Judicial- pudiera interpretarlas acudiendo a distintas

reglas y principios, incluso de carácter cultural, debiendo aplicarlas en los litigios concretos para asegurar la existencia de un Estado de Derecho.

Sin perjuicio de ello, en el denominado Estado de Derecho, se acepta y se otorga una primacía sustancial al principio de legalidad, estimándose que todo acto del Estado que interfiera con la libertad del individuo, aumentando el caudal de sus obligaciones o deberes, debe apoyarse en ley material, vale decir una ley emanada del Poder Legislativo que debe ser interpretada científica y razonablemente por los jueces sin que éstos gocen de la prerrogativa de crear derecho en el sentido técnico del vocablo (Linares Quintana, 1987).

La doctrina advierte sobre el peligro del denominado gobierno de los jueces (Borda 2008). Así considera que los magistrados deben ser el elemento conservador de la sociedad que evite los avances de la legislación originados en las Legislaturas populares; si ellos predominan en la organización del Estado, el progreso de la legislación se hace más pesado, el cambio requerido por las dinámicas sociedades modernas se vuelve más difícil, el clamor de las masas resulta por largo tiempo ignorado; por lo que la solución más acertada, desde el punto de vista político e institucional, es asegurar la independencia del Poder Judicial, como garantía inexcusable de las libertades humanas, pero impidiendo que su predominio rompa el equilibrio de poderes.

Se ha señalado, al respecto, que el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas, no son puntos sobre los que al Poder Judicial le corresponda pronunciarse, y solo los casos que trascienden ese ámbito de apreciación para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario, habilitan la intervención de los magistrados (CSJN, 24/4/10, “Massolo c/Transportes el Tejar”, Fallos 333:447; CSJN, 26/03/2019, “García, María Isabel c/AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, Fallos 342:411).

La ley, aclara la doctrina, es considerada, tradicionalmente, como la más importante de las fuentes del Derecho, pero sólo lo ha sido en determinadas épocas históricas y con referencia a algunos países (Cueto Rúa, 1982).

La ley, en su esencia, es la expresión conceptual de un órgano o funcionario de la comunidad que está autorizado a dictar mandatos legales mediante los cuales se

establece una relación general entre éstos y una conducta que debe ser cumplida obligatoriamente por los integrantes de la comunidad, bajo apercibimiento de sanciones legales.

Se la suele definir como una regla social obligatoria emanada de autoridad competente que responde a una estructura lógica perfecta, esto es dado A debe ser B, es decir que dadas ciertas premisas o condiciones fijadas por ley debe producirse una consecuencia necesaria.

El legislador, al sancionar las normas jurídicas, suele atribuir sentido moral a determinados actos humanos: algunos son considerados ilícitos por afectar o perturbar la vida comunitaria; otros, por el contrario, son considerados valiosos y, por ende, resultan reglamentados e, incluso, pueden ser fomentados mediante la concesión de recompensas y premios.

El orden jurídico, informa Goldschmidt (1973), refleja un orden de repartos de potencia o impotencia para los individuos algunos de los cuales son de carácter autoritario y traduce la voluntad de los supremos repartidores dentro de un plan de gobierno siguiendo un esquema vertical.

La doctrina sostiene que una norma jurídica es una regla de conducta señalada al hombre; a través de ella la sociedad hace saber a sus miembros, por intermedio de los órganos estatales, los medios a que deben ajustar su acción (Ves Losada, 1975). Ellas señalan qué actos se consideraban valiosos –es decir debidos- y cuáles son disvaliosos –es decir, indebidos- Se dirige y orienta la conducta social mediante un sistema de ventajas, de premios y de sanciones. Los dos polos extremos y contrapuestos del accionar jurídico se expresan a través de las nociones de licitud o ilicitud, que no significan otra cosa que atribuir a cierto hacer y omitir del hombre determinadas consecuencias, agradables o desagradables.

Las leyes, en definitiva, cumplen una doble misión: 1º) ofrecen un modelo de conducta cuyos elementos describen y 2º) dan directivas o instrucciones a los miembros de la sociedad y/o a sus órganos sobre lo que deben hacer o no hacer en determinadas circunstancias. La función educativa de todo ordenamiento, ínsita en la doble función enunciada, es evidente.

Bajo este esquema fáctico, la tarea legislativa es compleja y diversa. Compleja ya que es dificultoso reglamentar la conducta humana y, porque las personas persiguen y defienden la interpretación que más les favorece en beneficio de su propio interés personal y, es por ello que Holmes (1976) advierte que se debe mirar al derecho con los ojos del mal hombre al que sólo le importan las consecuencias materiales de la aplicación de las normas y no los mandamientos de su conciencia. Diversa porque la actividad humana es múltiple y porque la ciencia y la técnica innovan en la materia y cada día aparecen nuevos problemas y disciplinas que inciden en la vida comunitaria y que deben ser reglamentadas, la aparición de la informática a la que hemos aludido en el curso del presente estudio es uno de fenómenos más notables de nuestro mundo.

A su vez, la ley es mutable por el transcurso del tiempo, aspecto receptado por los regímenes jurídicos de las diversas Naciones así, por ejemplo, la República Argentina en el artículo 7º del Código Civil y Comercial de la Nación ha establecido:

A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.

Las directivas como la transcripta tiene por objeto:

- a) Establecer el principio de que, a partir de su entrada en vigencia, las leyes deben aplicarse en su máxima extensión, no sólo a los hechos y relaciones futuras sino también a los que hayan nacido al amparo de la ley anterior y se encuentren en plena vigencia al dictarse la nueva ley.
- b) Receptar el principio general de que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario.
- c) Establecer que, en ningún caso, las nuevas leyes podrán afectar derechos amparados por garantías constitucionales.

La intención del legislador es: 1) posibilitar que todo nuevo cuerpo legal tenga el mayor ámbito de aplicación posible ya que, presumiblemente, es más justo que el

cuerpo anterior que le ha precedido y 2) alcanzar el referido objetivo sin afectar la seguridad jurídica, preservando los derechos particulares de los individuos frente al accionar legislativo del Estado.

Los doctrinarios han sostenido que el legislador debe obrar con prudencia, cuidando de dictar leyes adecuadas a las formas en que los diversos pueblos procuran su subsistencia, por lo cual éstas no sólo deben ser justas, sino también, fáciles de ejecutar y particularmente adecuadas al gobierno y al pueblo que las recibe: “toda ley equívoca es injusta, porque castiga sin prevenir; toda ley que no es clara, nítida, precisa, es pernicioso” (Diderot y D’Alambert, 1994).

Vinculado a ello no es necesario imponer al pueblo las mejores leyes sino las mejores leyes que ese pueblo pueda exigir de acuerdo con su situación y señalándose que: el exceso de leyes demuestra la mala constitución del sistema político puesto que, al elaborarse para reprimir las injusticias y desórdenes, en un Estado donde hay más leyes deben existir también más desórdenes y que la inseguridad y la ineficacia de las leyes procede de su multiplicidad, de sus vicios en la elaboración, en el estilo y la sanción, de la diversidad de intérpretes y de las contradicciones judiciales (Diderot y D’Alambert, 1994).

En verdad, las leyes excesivas en número y deficientes en calidad no solo socavan el derecho sino que también erosionan la estabilidad normativa y la eficacia jurídica: la producción masiva de leyes termina por comprometer la certidumbre del derecho como método idóneo para la solución de conflictos. No obstante dicho fenómeno, se entiende que los magistrados, al interpretar las leyes, deben esforzarse por tratar de preservarlas y no destruir el mandato legislativo, lo que explica que la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica sea considerada, tradicionalmente, la última ratio del orden legal (Lorenzetti, 2015).

II. LAS CAUSALES DE LA DESPROTECCIÓN JURÍDICA OCASIONADAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

Aquellos factores que generan indefensión jurídica son: la aplicación de normativa no adecuada, los defectos en la interpretación normativa, los vacíos legales y conflictos normativos.

2.1. La aplicación de normativa no adecuada

La aplicación de normativa no ajustada al derecho a tutelar puede resultar contraria a la tutela pretendida. Esta causal de desprotección será analizada detenidamente en el apartado III del presente artículo.

2.2. Los defectos en la interpretación normativa

Se ha hablado de “brecha interpretativa” (Bayón, 2000) para hacer alusión a los diversos criterios interpretativos que poseen los magistrados, lo que les permite arribar a diferentes resultados, con la inseguridad jurídica que ello conlleva para el justiciables (Gargarella, 2007).

Criterios como: interpretación literal, interpretación popular, interpretación especializada, interpretación orgánico-sistemática, interpretación jurídico-realista, interpretación dinámica, interpretación de la voluntad del autor, interpretación teleológica, entre otras (Sagüés, 2003).

2.3. Los vacíos legales

Consiste en la ausencia de norma jurídica aplicable al supuesto de hecho en análisis.

Estos se configuran ante la omisión legislativa, la desactualización y la ambigüedad normativa.

Los métodos utilizados para zanjar esta dificultad consisten en la aplicación del principio de analogía, la aplicación de los principios generales del derecho, la sanción de nuevas normas y la utilización de criterios jurisprudenciales.

2.4. Los conflictos normativos

Refiere a la colisión que se da entre dos o más normas jurídicas aplicables a un supuesto de hecho por resultar incompatibles entre sí.

Existen distintas formas para resolver estos conflictos: según su jerarquía normativa, por su especificidad, conforme a su temporalidad y, por último, en caso de ser posible buscar la interpretación que armonice ambas normas en contienda.

III. EL IMPACTO NEGATIVO DE UN ORDENAMIENTO JURÍDICO INADECUADO PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A TUTELAR

El ordenamiento jurídico es el conjunto de normas y principios que regulan la vida en sociedad, cuyo objetivo es alcanzar la justicia y resguardar la seguridad jurídica, todo ello con miras a velar por la paz social.

En este marco, cuando el ordenamiento jurídico no se ajusta adecuadamente a la naturaleza del derecho que pretende resguardar lo termina vulnerando, lo que genera consecuencias negativas tanto para los individuos como para la comunidad.

En este punto el avance de la tecnología es el fenómeno principal que conlleva una inadecuación normativa y necesidad de la sanción de regulaciones acorde.

Es posible distinguir diversos perjuicios que derivan de la aplicación de un marco legal no acorde a las características del derecho a tutelar. No sólo se configura en detrimento del titular del derecho a resguardar, sino que tal situación tiene implicancias para el desarrollo de la comunidad.

a) Desprotección de derechos

El bien jurídico constituye el interés o valor protegido por el ordenamiento jurídico, cuya adecuada identificación resulta esencial para garantizar la efectividad de cualquier sistema normativo.

A su vez, las disposiciones legales deben responder a la naturaleza del bien jurídico que se pretende tutelar, de lo contrario ésta quedará desprovisto de protección efectiva, a pesar de presentar un resguardo normativo que es puramente formal.

En efecto, una tutela normativa que no resulta acorde a las características intrínsecas del bien jurídico es sinónimo de desprotección.

b) Injusticia y arbitrariedad

Un ordenamiento jurídico deficiente en su diseño puede derivar en situaciones de injusticia y arbitrariedad. Cuando la aplicación de las normas legales no conlleva a

una solución justa, sino por el contrario implica la priorización de los intereses de un particular por encima del interés general de la sociedad, lo que resulta contrario al principio de igualdad y conlleva al debilitamiento de la confianza en el sistema jurídico lo que implica el debilitamiento de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.

c) Erosión de la legitimidad del sistema legal

La legitimidad de un sistema jurídico radica, en gran medida, en su capacidad para garantizar de manera efectiva la protección de los derechos de la comunidad. La percepción de insuficiencia o ineficacia en las disposiciones normativas puede erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones responsables de su aplicación y cumplimiento.

Esta desconfianza producirá no sólo la apatía del ciudadano y desobediencia del ordenamiento jurídico sino incluso el cuestionamiento de legitimidad de las normas y las autoridades que las sancionan como las que las ejecutan.

Esto no es menor, pues la consecuencia final es un estado de anarquía, en que la comunidad optará por resolver sus controversias por fuera del marco legal, con el incremento de la tensión social.

d) La ausencia de seguridad jurídica

El ordenamiento jurídico tiene dos objetivos: uno es la justicia y el otro es la seguridad jurídica.

La seguridad jurídica es el principio fundamental que proporciona a los individuos previsibilidad y estabilidad respecto de las normas que rigen su conducta. Ante un apartamiento a estas, los sujetos saben que existen consecuencias.

Un ordenamiento jurídico que no se ajusta a la realidad que regula puede generar incertidumbre entre los ciudadanos, dificultando la comprensión sobre qué conductas son lícitas y cuáles no. Esta falta de claridad puede derivar en un incremento de la litigiosidad, interpretaciones contradictorias de las disposiciones legales y, en consecuencia, una sobrecarga del sistema judicial.

e) Un obstáculo para el desarrollo social y económico de la comunidad

La falta de adecuación del régimen legal puede convertirse en un valladar al desarrollo social y económico.

En efecto, ante un sistema que no garantiza los derechos, la sociedad no tiene expectativas lo que no sólo trae consecuencias de carácter económico, sino que no se desarrolla la educación ni la salud, se limita el potencial humano, disminuye el empleo, no existe inversión en ciencia y tecnología.

Los ciudadanos optan por no tomar decisiones a largo plazo, no existen inversiones ni de los integrantes de la comunidad ni de extranjeros, crece la migración, así disminuye la expectativa de bienestar social.

La adecuada correspondencia del ordenamiento jurídico al derecho a proteger de conformidad con la evolución de la sociedad resulta esencial para que el derecho finalmente se concrete. Un marco legal inadecuado no solo falla en su misión de protección, sino que genera injusticias, desconfianza en el sistema y obstáculos para el progreso de la sociedad. Por ello, es imperativo que los tres poderes del Estado se comprometan en diseñar y aplicar normas que realmente respondan a las necesidades de la comunidad.

IV. UN NUEVO CONCEPTO: EL RESGUARDO JURÍDICO EFECTIVO

En este punto resulta acertado aventurarse a un nuevo concepto que se podría denominar “el resguardo jurídico efectivo” para aludir a la efectividad de los instrumentos legales vigentes para tutelar derechos.

En efecto, en contraposición a la tutela judicial efectiva, concepto utilizado para hacer referencia a la garantía de las personas de acceder a un proceso judicial, a su derecho al debido proceso y a obtener el dictado de una sentencia judicial que pueda efectivizar su derecho, corresponde reflexionar sobre el reconocimiento a los ciudadanos de una garantía que asegure no sólo un sistema legal que proteja formalmente sus derechos, sino que la regulación jurídica permita su concreción.

En este punto, cabe entender a la tutela judicial efectiva y al resguardo jurídico efectivo como figuras paralelas que confluyen en el objetivo de lograr la concreción de los derechos, esto último de conformidad con el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto dispone que los Estados Partes se encuentran comprometidos a velar por la efectividad de los derechos.

En este marco, la legislación debe adaptarse a los cambios de la sociedad, y evitar ser una estructura estática no hábil para proteger los derechos de los ciudadanos, lo que revela la importancia del dinamismo jurídico, esto es que las normas evolucionen.

En este punto, cabe pensar en la necesidad de que el parlamento asuma un rol activo al cumplir su función, en lugar de un lugar estático. Del mismo modo que Estados Unidos ha dado origen al término “activismo judicial”, sería posible transpolar este concepto a otros poderes estatales.

Se apunta a la obligación por parte del Poder Legislativo de dictar textos legislativos que sean eficaces, siendo este poder del Estado el encargado de sancionar las leyes acordes a las necesidades políticas y sociales de la comunidad.

En cuanto al concepto “activismo judicial” el constitucionalista argentino Maraniello (2012) ha señalado que la referida locución fue utilizada por primera vez por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al autoproclamarse como “activista” en el caso “Brown vs. Board of Education of Topeka” del 17/05/1954 al declarar la inconstitucionalidad de la segregación racial en las escuelas norteamericanas. En este escenario, el referido doctrinario explica que los magistrados decidieron evidenciar el conflicto de derechos constitucionales, posición que el tribunal luego reafirmó en la causa “Cooper vs. Aaron”. Más allá de la relevancia de la jurisprudencia mencionada, el constitucionalista ha puesto de resalto que en las Siete Partidas del Rey Alfonso el Sabio (trans. 1807), en la Partida Tercera, Ley 11, Título IV, imponía al magistrado “saber la verdad del pleito por cuantas maneras pudiese”.

Así, sería posible pensar en un activismo legislativo que tome la iniciativa frente a las variables necesidades de la comunidad y se esfuerce por responder a las mismas.

Esto no es sencillo ya que la realidad es mutable, por lo cual una norma que hoy resulta adecuada al día siguiente puede no serlo.

El concepto que se propone es de carácter político, congruente con la actualidad ya que el ciudadano solicita no sólo vivir en democracia, sino que esta democracia le garantice un mayor nivel de bienestar material y moral, lo que en el pasado era impensable. Parte de la evolución de la democracia de la mano con la tecnología ha llevado a que los ciudadanos asuman su rol de protagonistas y en dicho rol exijan a las autoridades que los representan ciertas condiciones que permitan mejorar su calidad de vida.

La imperfección de las leyes y la deficiente actividad judicial son factores que minan la confianza de los ciudadanos en el orden institucional y ello es un factor altamente negativo que lleva a la degradación del sistema democrático hacia posturas populistas o autoritarias.

Montesquieu (trans. 2002) en su obra “Del espíritu de las leyes” señala que toda democracia se apoya en la virtud y en el respeto de los ciudadanos por el principio de igualdad. Son estos factores los que determinan la sabiduría de las leyes que deben ser pocas y buenas y adaptadas a la realidad política, social y económica de cada comunidad.

V. LA VIABILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL POR LA OMISIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DE SANCIONAR NORMAS EFICACES

En este punto cabe analizar si en la actualidad existe una previsión normativa o regulación tendiente a lograr que el Poder Legislativo cumpla con su rol en procura del resguardo jurídico efectivo de los derechos. En concreto, si es posible responsabilizar al parlamento en caso que no asuma un papel activo con miras a velar por un ordenamiento jurídico actualizado que logre una eficaz tutela de derechos acorde a los cambios que sufre la sociedad. En otras palabras, cabría preguntarse si es viable denunciar la configuración de responsabilidad estatal por omisión por parte del Poder Legislativo en el supuesto descripto.

En nuestra realidad institucional, una de las garantías concretas del denominado “Estado de Derecho” consiste en aceptar que el propio Estado, tanto en su condición de sujeto de derecho privado como de órgano de poder de derecho público, se encuentra subordinado al orden jurídico vigente.

Se entiende, a tal fin y según doctrina, que toda la actividad estatal se debe adecuar a las normas jurídicas dictadas por el propio Estado y que la obligatoriedad de tales normas no se limita a los particulares, sino que se extiende al Estado, cuyo desenvolvimiento debe concretarse en el marco de la ley y nunca fuera de ella (Badeni, 2004; Marienhoff, 1975).

La aceptación de este axioma institucional permite que el Estado, como sujeto de derecho, pueda ser llevado a juicio ante los tribunales competentes (principio de justiciabilidad o demandabilidad del Estado ante los Tribunales de Justicia).

El principio de justiciabilidad del Estado admitido, según Fiorini (1976), en el artículo 100 del texto primitivo de nuestra Constitución Nacional carecería de trascendencia y eficacia si no se aceptase que el Estado debe asumir, también, responsabilidades por los daños que pueda producir en el ejercicio de las potestades que le son propias, es decir, por su actividad administrativa, legislativa y judicial.

Esta responsabilidad puede ser clasificada en contractual o extracontractual; generada por acciones u omisiones; fundada en hechos o actos lícitos o ilícitos. En lo primordial, será una responsabilidad fundada en el principio axiológico de que todo daño debe ser reparado.

Este es un principio axiológico de la responsabilidad estatal fluye imperativamente de los valores jurídicos que conviven en el orden social constitucional democrático que es el adoptado por nuestra Carta Magna.

Con respecto a esta cuestión, Bartolomé Fiorini (1976) ha sostenido que la misión del Estado de Derecho es evitar perjuicios a los individuos quienes, en su convivencia en sociedad, necesitan de un orden seguro y de existencia pacífica a través de la concepción solidaria que contienen las normas jurídicas que reglan conductas individuales dentro de un orden determinado; y que el daño causado por sujeto o de cualquier órgano de persona jurídica estatal implica un ataque a

la convivencia jurídica, pacífica y segura de los derechos de los individuos; que merece una reparación resarcitoria.

En forma coincidente, Rodolfo Bullrich (1920) ha afirmado que cuando existe un hecho que lesione a una persona y que ese hecho haya sido cometido por un agente del Estado, con los medios que le da el Estado, aun cuando sea excediendo su función, obliga a la responsabilidad del Estado. Ello se sustenta en dos razones principales: la primera porque lo ha ejecutado valiéndose de los medios que le da el Estado, y la segunda porque el Estado debe ser cuidadoso y diligente en la elección de sus representantes (Aberastury, 2007).

Efectuada dicha precisión es posible que el Estado resulte responsable por sus omisiones.

Al respecto se ha sostenido “existirá responsabilidad estatal por omisión cuando el Estado, en ejercicio de las funciones que le son propias, omite antijurídicamente la realización de actos o hechos que, de haberse llevado a cabo, hubieren resultado razonablemente idóneos para evitar el daño en definitiva sucedido” (Canda, 2016).

A ello cabe agregar que a través de la sanción de la ley 26.944 en el año 2014 en su artículo 3ro. se han definido los requisitos de la responsabilidad del Estado por actividad e inactividad, esto es la existencia de un daño cierto, la imputabilidad de la actividad o inactividad al órgano estatal, la existencia de una relación de causalidad con el daño causado y la falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado (Bianchi, 2018).

Lo anterior revela que debe acreditarse una omisión del Estado frente a una obligación específica de actuar en determinado sentido, por lo que no bastaría el incumplimiento de un deber genérico.

Con lo cual, aún si se acreditara una omisión imputable al Estado, un daño y su relación causal, esto no sería suficiente para responsabilizarlo jurídicamente.

En este marco no resulta viable responsabilizar al Poder Legislativo ante una desactualización del sistema jurídico, sin importar lo evidente que resulte la misma.

VI. LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DEL PODER LEGISLATIVO POR VULNERACIÓN DE LA GARANTÍA DE RESGUARDO JURÍDICO EFECTIVO

Precisada la imposibilidad de responsabilizar jurídicamente al parlamento, corresponde indagar sobre las consecuencias de la ausencia de activismo por parte de este poder del Estado.

Parte de la doctrina ha sostenido que a partir de la reforma constitucional del año 1994 Argentina, al conferir a determinados tratados internacionales de derechos humanos jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional), los cuales establecen a la persona humana como acreedora de derechos y al Estado como principal obligado a través de su actuación positiva a lograr su concreción (Salomoni, 1999), la irresponsabilidad jurídica resultaría contradictoria al ordenamiento jurídico, pues la normativa constitucional promueve que los ciudadanos cuenten con la posibilidad de accionar a fin de resguardar sus derechos.

Se ha utilizado el término “constitucionalismo transformador” para interpretar y aplicar las normas de carácter constitucional de manera que impulsen un cambio social para conseguir objetivos constitucionales (Klare, 1998; Von Bogdandy, 2020).

Ahora bien, esta transformación requiere un esfuerzo de los múltiples actores de la sociedad y sobre todo voluntad política (Huneus, 2011; Dulitzky, 2014; Soley, 2017), se suele poner el acento en el actuar del Poder Ejecutivo, pero lo cierto es que se encuentran involucrados los tres poderes del Estado, en particular el Poder Legislativo a través de la sanción de las leyes.

En este punto resulta necesario destacar que, más allá de lo contradictorio que resulta el sistema jurídico, en particular el ordenamiento argentino, al subordinar la responsabilidad estatal a una serie de recaudos que en el fondo resultan valladares para exigir la efectivización de los derechos humanos que el propio ordenamiento no sólo reconoce sino que ampara, como se señaló en el apartado IV, resulta necesario reconocer una garantía a la que en el presente artículo se denominó “el resguardo jurídico efectivo”, el cual se trataría un concepto de carácter político para referir a la inadecuación normativa a la realidad regulada.

En efecto, la exigibilidad sería de tipo político, no siendo posible que un ciudadano pueda responsabilizar al Poder Legislativo por la falta de actualización de las leyes para lograr una efectiva tutela de derechos, a pesar que en la cabeza de este poder del Estado pesa la obligación de sancionar leyes que sean idóneas y adecuadas para resolver los conflictos humanos y eleven la calidad de vida de las personas.

Si bien el ciudadano del siglo XXI espera lo mismo que el ciudadano el siglo XVIII, quien ante la Revolución Francesa intentó impregnar a la comunidad con los postulados de libertad, igualdad y fraternidad¹, lo cierto es que lo hace bajo otro ángulo pues posee una clara noción de su carácter de acreedor de derechos que en el pasado no existía.

En efecto, la Revolución Francesa de carácter burgués anudada a la Revolución Industrial permitió que, desde el punto de vista material, se incrementase la riqueza de la mayoría a la población. Se logró, asimismo, remover desigualdades estamentarias al defenderse la garantía de igualdad ante la ley (artículo 16 de la Constitución de la Nación Argentina), pero el respeto al principio de igualdad de oportunidades o de hecho de las personas es una deuda pendiente.

Por otra parte, estamos muy lejos de satisfacer los ideales de una sociedad fraterna. Las desigualdades de hecho entre las personas incrementan los conflictos de intereses y sirven para instalar un discurso de odio entre los diferentes grupos sociales y tal situación se potencia cuando no se respetan ciertos valores morales y principios éticos. El denominado “hombre light” -es decir el sujeto carente de ideales y hedonista que sólo piensa en su éxito personal con indiferencia de la suerte de sus semejantes- no resulta el mejor para lograr un fortalecimiento social (Rojas, 2014).

El referido fenómeno pone en jaque a los sistemas democráticos de gobierno.

Cabe recordar, en tal sentido, que durante el curso del siglo XX las democracias occidentales fueron afectadas por fenómenos tan divergentes como la aparición del nazismo y del stalinismo.

¹ La declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano -1789- será decisiva en la fundación de un orden nuevo (Giner, 1982).

El primero, surgido en el seno de una sociedad destruida por la Primera Guerra Mundial, atacó como patológica a la incipiente democracia de Weimar (1919-1933) que intentaba rescatar a Alemania de su postración económica y logró destruirla poniendo durante tres lustros en jaque a la cultura occidental y a los sistemas democráticos de gobierno.

Cabe señalar que la denominada República de Weimar se fundamentó en una Constitución que reconoció amplios derechos políticos y sociales, pero, como contrapartida, centralizaba el poder político sin mecanismos adecuados de control lo que permitió que los nazis accedieran a un poder absoluto: ni Adolf Hitler, ni ninguno de sus seguidores participaba de los ideales propios del sistema democrático.

El segundo fenómeno que nos ocupa, es decir el stalinismo, fue un movimiento político novedoso que pretendía instaurar un Estado socialista acorde con reglas de producción marxista, por lo cual atacó los principios de la democracia liberal con el objeto de instalar una sociedad autoritaria que tuviera en sus manos todo el poder del Estado con el objeto de incrementar la calidad de vida de los ciudadanos del régimen soviético, pero fracasó en su intento. No fueron los misiles norteamericanos los que pusieron fin al experimento soviético sino la ineficiencia y corruptela de sus propios funcionarios. El desplome obedeció a razones económicas ya que, según se ha puntualizado, la perestroika iniciada por Gorbachov no hizo más que alargar la agonía de un enfermo terminal que no había podido generar estructuras económicas, políticas y territoriales que fueran libres y eficientes (Fuentes y La Parra López, 2001).

La caída del muro de Berlín y el disgregamiento de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en Estados autónomos reveló el fracaso de un sistema totalitario de gobierno que se apoyaba en una ideología de cuño autoritario y que no autorizaba la discusión libre de ideas.

En tal sentido, un pensador al hacer referencia a los citados sistemas autoritarios y burocráticos, nos recuerda que gran parte de la sociedad alemana -que era una de las más elevadas intelectualmente- se sintió fascinada por la personalidad de Hitler considerándolo representante de un cuerpo místico unificado con una única

voluntad: la voluntad del pueblo (Harari, 2024). El referido autor ha señalado que el supuesto líder “poseía una intuición infalible para saber que sentía y que deseaba el pueblo alemán” y, aunque hubiera ciudadanos que disintieran, “no significaba que este pudiera estar equivocado, sino que los disidentes pertenecían a un grupo de traidores extranjeros -judíos, comunistas, liberales- y no al pueblo”.

Alemania, nos recuerda un analista político (Sánchez Ron, 2010) era “la nación de la ciencia y la técnica”, por lo que, racionalmente resulta inexplicable que un psicópata ascendiera a la condición de canciller del Estado Alemán y, sin embargo, ello fue lo que hizo Adolfo Hitler de 1933 con el apoyo emocional de un importante sector de la sociedad alemana

A su vez, el sueño que guiaba a los bolcheviques, cuando se hicieron con el control de Rusia después de la revolución de 1917, obedecía a una visión mesiánica: “Marx había propugnado que, durante milenios, todas las sociedades humanas habían estado dominadas por élites corruptas que oprimían al pueblo”. Los bolcheviques afirmaban saber cómo terminar de una vez por todas con cualquier tipo de opresión y crear una sociedad perfectamente justa sobre la tierra y rechazaron introducir cualquier mecanismo de autocorrección que pudiera cuestionar su visión o sus métodos, creer en su propia infalibilidad llevó a los bolcheviques a destruir las instituciones democráticas y crear un régimen totalitario de un partido único.

En tal sentido, Giner (1982) ha señalado que, en el terreno de la cultura, el estalinismo representó el establecimiento de un dogmatismo sin precedentes ya que sus teóricos -no del todo desaparecidos con la muerte de su jefe- se aferran a un importante postulado marxista de que cada clase crea su cultura para llevarlas al extremo de negar toda objetividad a la ciencia creada en los países no comunistas, según esto la psicología de Freud o la física de Einstein serían meros exponentes de la ideología burguesa occidental.

Los experimentos populistas a los que hemos hecho referencia -nazismo y stalinismo- fracasaron pero, en su momento, estuvieron en condiciones de jaquear y aun de destruir la creencia sustancial de los pueblos en un sistema democrático de gobierno -elecciones libres con existencia de partidos políticos autónomos,

igualdad ciudadana, libertad de prensa, respeto de los derechos de todas las personas, reconocimiento institucional de los derechos de las minorías, etcétera. y el fenómeno podría repetirse en el siglo XXI si los Estados de cuño democrático, que respetan los principios sustanciales de la sociedad occidental, no tienen el éxito político que prometen a sus ciudadanos.

El jurista austríaco Hans Kelsen que, en su momento, intentó elaborar una teoría pura del derecho que pusiera fin a la preponderancia de la ideología del sistema de derechos naturales inspirado en la doctrina cristiana, advirtió, oportunamente, que:

Únicamente un orden jurídico que no satisface los intereses de uno en perjuicio de los otros, a fin de reducir al mínimo las fricciones posibles, puede aspirar a una existencia relativamente larga. Solo un orden de este tipo se hallaría en condiciones de asegurar a los sometidos a él una paz social sobre bases relativamente permanentes. Y aun cuando el ideal de justicia en el sentido originario aquí desenvuelto es algo distinto del ideal de paz, existe una clara tendencia a identificar los dos ideales o, cuando menos, a substituir el de paz por el de justicia (Kelsen, 1979).

La intención de conducir a la sociedad a mayores niveles de bienestar social es el viejo objetivo de la política como fenómeno institucional² y, al presente, nos encontramos ante una batalla cultural en la que resulta necesario acuñar nuevos términos y nuevos ideales: en el mundo moderno, advierten los politólogos, las democracias pueden erosionar en forma imperceptible hacia gobiernos autoritarios y entendemos que la pérdida de fe en el sistema puede ser uno de los factores que contribuyan al desarrollo de tal fenómeno (Levitsky y Ziblatt, 2022).

El ciudadano del siglo XXI espera que las democracias funcionen eficientemente y de ahí el concepto que nos ocupa - resguardo jurídico efectivo- sería un concepto de cuño político pero de naturaleza ética para medir, no la responsabilidad del Poder Legislativo sino de las personas que integran dicho poder y que se constituyen en voceros personales del régimen republicano de gobierno: el pueblo no delibera ni gobierna -enfatisa el artículo 22 de nuestra Carta Magna- sino por medio de sus

² En palabras de Aristóteles: “el fin de la sociedad política no es, pues, solamente vivir con sus semejantes sino realizar el bien” (Aristóteles, trans. 2003).

representantes y autoridades creadas por esta Constitución, estimándose que toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste comete delito de sedición.

La claridad y la plenitud de la manda constitucional impone exigir una mayor responsabilidad institucional a quienes tienen en sus manos el Poder Legislativo del Estado de Derecho, ya que están obligados a actuar con la debida diligencia para incrementar la calidad de vida de los habitantes utilizando los mecanismos idóneos. La praxis política impone mayor responsabilidad personal de quienes manejan las riendas del Estado.

Cabe recordar que el denominado “juicio de residencia” fue un medio técnico de control impuesto por la monarquía de los Austrias para juzgar la responsabilidad personal de los virreyes, gobernadores, capitanes generales y otros funcionarios de importancia de sus actos de gobierno. El origen de la institución se encuentra en las Partidas de Alfonso el Sabio y, en virtud de ella, se obligaba a éstos funcionarios a rendir cuenta de sus actos ante el denominado juez de residencia que, trasladándose al lugar donde el funcionario había ejercitado su mandato, convocaba a los particulares para que efectuasen denuncias con respecto a su actividad tanto pública como privada y, en caso de demostrarse que el emplazado hubiera sido indigno de su mandato, podía dictarse sentencia condenatoria contra su persona, lo que conllevaba penas de carácter patrimonial y la declaración de inhabilidad para ejercer un nuevo cargo público.

Al presente existe una cierta intención política de revitalizar la citada figura jurídica³ y, si bien la institución fracasó en el derecho indiano, una de las razones por las que se pretende su restauración no es sólo la existencia de corrupción política sino el fracaso de los funcionarios públicos en elevar el bienestar general de los habitantes de la Nación. Si bien no resulta necesario retomar tal medio técnico de control por ser superfluo y sobreabundante, corresponde analizar la necesidad de lograr un resguardo jurídico efectivo de los derechos que tiene toda la ciudadanía dentro de un sistema democrático para que las leyes no se transformen en promesas vacías de reformas que no se efectivizan en el campo social, económico e institucional.

³ En Argentina en el año 2023, el diputado Daniel Julio Ferreyra presentó un proyecto legislativo tendiente a instaurar la figura a nivel federal (proyecto de ley n° 2326-D-2023) conforme trámite parlamentario N° 64. En la actualidad se encuentra prevista únicamente en las provincias de Tierra del Fuego y Chaco (Méndez Acosta, 2024).

VII. CONCLUSIÓN

La consolidación del concepto de **resguardo jurídico efectivo** emerge como una necesidad política y ética en el marco de los sistemas democráticos modernos. Este concepto resalta la importancia de adaptar la legislación y las instituciones a las cambiantes necesidades de la sociedad, garantizando no sólo el reconocimiento formal de derechos, sino también su implementación efectiva. La falta de actualización normativa y de un compromiso real por parte del Poder Legislativo no solo mina la confianza ciudadana en el sistema democrático, sino que abre la puerta a discursos populistas y autoritarios que amenazan su estabilidad.

La responsabilidad institucional de quienes integran los órganos de poder, especialmente el legislativo, resulta esencial para que la democracia cumpla con su promesa de mejorar la calidad de vida de las personas. Esto incluye la creación de leyes dinámicas y efectivas que reflejen las demandas actuales de la ciudadanía, superando la mera formalidad y evitando que se conviertan en simples declaraciones simbólicas.

En última instancia, el fortalecimiento de los mecanismos de control, la transparencia y la rendición de cuentas, así como un enfoque ético en el ejercicio del poder, son fundamentales para que el resguardo jurídico efectivo se materialice como una herramienta de consolidación democrática. Solo así será posible responder a las exigencias de la comunidad, garantizando una sociedad más justa, equitativa y sostenible.

BIBLIOGRAFÍA

- Aberastury, P. (2007). *Responsabilidad del Estado*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- Aristóteles (2003). *La Política* (Trad. J. Marías y M. Araujo). Buenos Aires: Centro Editor de Cultura (trabajo original escrito entre 330 a.C. y 323 a.C.).
- Badeni, G. (2004). *Tratado de Derecho Constitucional*. Buenos Aires: La Ley.
- Bayón, J. C. (2000). “Derechos, democracia y constitución”. *Discusiones, I*, pp. 65–94. Recuperado en fecha 18/01/2025 de <https://doi.org/10.52292/j.dsc.2000.2378>
- Bianchi, A. B. (2018). “La responsabilidad del Estado por actividad legislativa (a propósito de la ley de responsabilidad del Estado)”. *El Derecho*, 259-687.
- Borda, G. (2008). *Tratado de Derecho Civil. Parte General*. Buenos Aires: La Ley.
- Bullrich, R. (1920). *La responsabilidad del Estado*. Buenos Aires: Jesús Menéndez.
- Canda, F. (2016). “Control judicial de la responsabilidad del Estado por omisión: pautas jurisprudenciales para una interpretación de la ley 26.944”. *El control de la actividad estatal, II*, pp. 393-424.
- Cueto Rúa, J. (1982). *Fuentes del Derecho*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- Diderot, D. y D’Alambert, J. (1994). *Artículos políticos de la Enciclopedia*. Barcelona: Altaya.
- Dulitzky, A. E. (2014). “El Impacto del Control de Convencionalidad. ¿Un Cambio de Paradigma en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?”, en J. C. Rivera (director). *Tratado de los Derechos Constitucionales*. (pp. 533-569). Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- Fiorini B. (1976). *Derecho Administrativo*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- Fuentes, J. F. y La Parra López, E. (2001). *Historia universal del siglo XX*:

- De la Primera Guerra Mundial al ataque a las Torres Gemelas*. Madrid: Síntesis.
- Gargarella, R. (2007). “De la alquimia interpretativa al maltrato constitucional. La interpretación del derecho en manos de la Corte Suprema argentina”. *Jurisprudencia argentina, Fascículo II*, pp. 3-10.
- Giner, S. (1982). *Historia del Pensamiento Social*. Barcelona: Ariel.
- Goldschmidt, W. (1973). *Introducción filosófica al Derecho*. Buenos Aires: Depalma.
- Harari, Y. N. (2024). *Nexus*. Buenos Aires: Debate.
- Holmes, O. (1976). *La senda del Derecho*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- Huneus, A. (2011). “Courts Resisting Courts: Lessons from the Inter-American Court’s Struggle to Enforce Human Rights,” *Cornell International Law Journal*, vol. 44, No. 3, Article 2. Recuperado en fecha 18/01/2025 de <https://scholarship.law.cornell.edu/cilj/vol44/iss3/2>
- Kelsen, H (1979). *Teoría General del Derecho y del Estado* (Trad. E. García Máynez). México: Universidad Nacional Autónoma de México (trabajo original publicado en 1945).
- Klare, K. E. (1998). “Legal Culture and Transformative Constitutionalism”, *South African Journal on Human Rights*, 14 (1), pp. 146-188.
- Las siete partidas del rey don Alfonso el Sabio: cotejadas con varios códices antiguos por la Real Academia de la Historia* (1807). Madrid: La Imprenta Real.
- Levitsky, S. y Ziblatt, D. (2022). *Cómo mueren las democracias*. Barcelona: Ariel.
- Linares Quintana, S. V. (1987). *Reglas para la interpretación de la Constitución*. Buenos Aires: Plus Ultra.
- Lorenzetti, R. L. (2015). *Código Civil y Comercia de la Nación Comentado*. Santa Fe: Rubinzal Culzoni.
- Maraniello, P. A. (2012). “El activismo judicial, una herramienta de

- protección constitucional”. *Revista de Ciencias Sociales*, 6 (32), pp. 46-83. Recuperado en fecha 18/01/2025 de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4548361>
- Marienhoff, M. S. (1975). *Tratado de Derecho Administrativo*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- Méndez Acosta, J. (19/01/2024). “La reinstauración del juicio de residencia, una propuesta concreta”. *Clarín*. Recuperado en fecha 18/01/2025 de https://www.clarin.com/opinion/reinstauracion-juicio-residencia-propuesta-concreta_0_ZlkBivPbzR.html?srsltid=AfmBOorAe6HHj0u6ZHndYx1FHfXUKH0VOAzwkcRRqQXTaPglEuZZ-8xJ
- Montesquieu (2002). *Del espíritu de las leyes* (Trad. M. Blázquez y P. De Vega). Madrid: Tecnos (trabajo original publicado en 1748).
- Rojas, E. (2014). *El hombre light: la importancia de una vida con valores*. México: Espasa.
- Sagüés, N. P. (2003). “Interpretación constitucional y alquimia constitucional (el arsenal argumentativo de los tribunales supremos”. *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional*, 1, pp. 154-171.
- Salomoni, J. L. (1999). “La responsabilidad del estado por omisión en la República Argentina”. *Biblioteca Jurídica Virtual*, pp. 229-264. Recuperado en fecha 18/01/2025 de <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2499/11.pdf>
- Sánchez Ron, J. M. (2010). *Ciencia, política y poder: Napoleón, Hitler, Stalin y Eisenhower*. Buenos Aires, Fundación BBVA.
- Soley, X. (2017). “The Transformative Dimension of Inter-American Jurisprudence”, en A. Von Bogdandy y otros (eds). *Transformative Constitutionalism in Latin America. The Emergence of a New Ius Commune* (pp. 337-355). Oxford: Oxford University Press.
- Ves Losada, A. (1975). *Sociología del Derecho*. Buenos Aires: Abaco de Rodolfo Depalma.
- Von Bogdandy, A (2020). *Por un derecho común para América Latina*. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores.

FUENTES JURISPRUDENCIALES

CSJN, 20/04/2010, “Massolo, Alberto José c/Transportes del Tejar SA y otro s/ daños y perjuicios”, Fallos 333:447.

CSJN, 26/03/2019, “García, María Isabel c/AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, Fallos 342:411.

“Brown vs. Board of Education of Topeka” (sentencia 347 U.S. 483 del 17/05/1954).

Cooper vs. Aaron, 358 US 1, 1958.

FUENTES NORMATIVAS

Constitución de la Nación Argentina.

Código Civil y Comercial de la Nación.

Ley 26.944. Sancionada en fecha 2 de julio de 2024.